

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DEL ESPINAL –TOLIMA

j02cctoespinal@cendoj.ramajudicial.gov.co

Espinal, Tolima

EXP. DIGITAL:	73319-31-03-002- 2023-00175 -00
PROCESO:	VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES:	LINNEY ADRIANA CHALA ANDUQUIA Y OTROS.
DEMANDADO:	BOLIVARIANO S.A. Y OTROS.
ASUNTO:	RECURSO DE REPOSICIÓN SUBSIDIO APELACIÓN – Auto 3-11-2023

ROBINSON JAVIER HERRERA PEÑALOZA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 93.134.761 expedida en el Espinal (Tolima), con T.P. No. 258.066 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la parte actora en el proceso de la referencia, me permito interponer **recurso de reposición en subsidio apelación** contra la decisión que NIEGA el amparo de pobreza y solicitó que se arrimara elementos que lo constataran en providencia del dieciséis (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), así:

“Previamente al estudio de los requisitos formales de la demanda la parte actora deberá -con el fin de no vulnerar el requisito de procedibilidad y atendiendo la petición de amparo- aportar elementos objetivos de verificación que permitan constatar la precariedad para asumir los gastos del proceso”

Me permito poner en conocimiento del despacho, que mis prohijados mediante escrito de **SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA** manifestaron **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, no contar con ingresos suficientes para sufragar los gastos correspondientes al proceso de la referencia, en virtud de las constancias que se anexan dentro del escrito del presente recurso en donde constan que mis prohijados se encuentran en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y se encuentran en régimen subsidiado de salud. No obstante cabe insistir que de la solicitud de amparo de pobreza elevada por mis prohijados se encuentran bajo los parámetros establecidos por el artículo 152 del C.G. del P. como lo es la gravedad de juramento.

De Igual forma, me permito sustentar el recurso antes mencionado en los siguientes términos:

PRIMERO: PRECEPTOS INSTRUMENTALES QUE REGULAN EL AMPARO DE POBREZA

Artículo 151 Código General del Proceso:

Procedencia: *Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley*

*Calle 11 No. 1-92 Edificio Centro de Especialista oficina 204
Celulares. 310 4545637
Ibague - Tolima*

debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.

Artículo 152 Código General del Proceso:

Oportunidad, competencia y requisitos: *El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.*

El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo.

SEGUNDA: NOCIÓN DE AMPARO DE POBREZA

La institución jurídica de amparo de pobreza se encuentra estatuida a favor de quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos.

Las normas citadas son desarrollo del precepto 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de acuerdo con el cual le corresponde al Estado garantizar el acceso a la administración de justicia y, específicamente, señala que debe asumir el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública.

La Corte Suprema de Justicia (auto del 14 de diciembre de 1983), señaló:

“El amparo de pobreza se fundamenta en dos principios básicos de nuestro sistema judicial como son la gratuidad de la justicia y la igualdad de las partes ante la ley; es la manifestación más clara de estos principios.

Si hemos de ceñirnos a la realidad es reconocer que en parte tales principios resultan desvirtuados entre otras razones, por los diferentes gastos como cauciones, honorarios y aun impuestos que la ley exige en una gran cantidad de casos.

En prevención de estas desigualdades el legislador consagró como medio de mantener el equilibrio, en la medida de lo posible, el amparo de pobreza, que libera a la parte efectuar esos gastos que impedirían su defensa”.

TERCERO: FINES DEL AMPARO DE POBREZA Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El objeto del instituto procesal del amparo de pobreza está encaminado a garantizar a las personas de escasos recursos la defensa de sus derechos, de modo que se les permita acceder a la administración de justicia en los términos del artículo 229 de la Constitución Política, exonerándolas de las cargas económicas que para las partes implica la decisión de los conflictos jurídicos, sobre todo frente a aquellos que pueden menoscabar lo necesario para su subsistencia y la de quienes se les deba alimentos (CSJ AL, del 19 de mayo 2004, rad. 24018).

En reciente decisión, la Sala de Casación Civil, en providencia CSJ STC1782-2020, manifestó:

“1...] el amparo de pobreza constituye una garantía real y efectiva para que los ciudadanos que no cuenten con la solvencia económica para sufragar los gastos propios del proceso no vean cercenadas sus posibilidades de acceder a la administración judicial -con todo lo que ello implica-; pues, en palabras de la Corte Constitucional, esta prerrogativa presupone, por lo menos, las siguientes tres obligaciones:

El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.

En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger ;l de realizar los derechos humanos.

Con base en esta clasificación, a continuación, se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia.

En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.

En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.

En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho m, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas u medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso g de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones (C.C., sentencia T-283, 16 mayo 2013; C-426, 29 mayo 2002, entre otras).”

Sobre esa figura, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-616 de 2016 la Corte Constitucional, explicó: “La persona a quien se le ha concedido el amparo de pobreza no solo se le garantizará su derecho al acceso a la administración de justicia por medio de la designación de un abogado de oficio, sino que además no estará obligado a incurrir en los costos asociados al proceso previstos en el ordenamiento jurídico, lo cual es una protección adicional que obedece a la obligación social y estatal de solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones de necesidad, como es el caso de aquellos con dificultades económicas graves que pueden poner en peligro su propia subsistencia y la de las personas a su cargo.”

Por su parte, el Consejo de Estado en providencia del 4 de junio de 1981, Sala de lo Contencioso Administrativo, señaló: *“Evidentemente el objeto de este instituto procesal es asegurar a los pobres la defensa de sus derechos, colocándolos en condiciones de accesibilidad a la justicia, dentro de una sociedad caracterizada por las desigualdades sociales. Para ello los exime de los obstáculos o cargas de carácter económico que aún subsisten en el campo de la solución jurisdiccional, como lo son los honorarios de los abogados, los honorarios de los peritos, las cauciones y otras expensas”.*

Algunos requisitos del amparo de pobreza Se puede identificar dos requisitos exigibles para presentar la solicitud de amparo de pobreza, a saber:

Que la solicitud se presente bajo la gravedad de juramento. En sentencia STC1567-2020, la Sala de Casación Civil, al referirse a los requisitos, oportunidad y trámite para conceder el amparo de pobreza lo siguiente: En cuanto a los requisitos, oportunidad y trámite para obtener la prerrogativa en comento, los cánones 152 y 153 id señalan lineamientos

respectivos; en lo que aquí concierne, el inciso 2° de la primera norma manda que el *“solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente”*, esto es, en el 151 transcrito arriba. De tal marco, fluye que **no es necesario que la parte o el tercero acrediten ni siquiera sumariamente la insuficiencia patrimonial que los mueve a “solicitar el amparo de pobreza”; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la “gravedad del juramento”.**

Esto se justifica, de un lado, en la presunción de buena fe que cubre a la persona que hace la manifestación, artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, y de otro, en la eficacia y valor que el mismo ordenamiento jurídico le otorga al juramento deferido, en este evento el artículo 207 Código General del Proceso; pues, suponer cosa distinta sería tanto como partir de la base de que el petente falta a la verdad, lo que obviamente está proscrito.

Esa tesis se refuerza teniendo en cuenta que, como se dijera en CSJ AC2143-2019, *“... para la demostración de esta situación bastará que el interesado afirme, bajo juramento, que se encuentra en las condiciones atrás enunciadas (artículo 152 ibidem), sin que proceda la práctica de pruebas, pues la solicitud se decide de plano”*.

No significa que el beneficio sea ajeno por completo a control del Juez, solo que éste se realiza con posterioridad si el adversario discute su concesión o prolongación, hipótesis en la cual sí es pertinente la «aportación o solicitud de pruebas» tanto del que aspira la extinción del «amparo de pobreza» como del que pretende su continuidad.

En definitiva, no es forzoso demostrar la carencia de recursos económicos con las connotaciones enlistadas en el artículo 151 del C.G.P., a la hora de elevar la solicitud de amparo de pobreza ni, por tanto, ello se torna relevante para desatlarla en un comienzo, pues en ese instante sólo se exige afirmarlo bajo la gravedad del juramento.

La obligatoriedad de soportar esa circunstancia surge después, sólo si el contrincante se opone, a la luz del canon 158 del C.G.P., a tono del cual en caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondrá sendas multas de un salario mínimo mensual.

La misma Corporación en la ya citada decisión STC1782-2020, dijo que no es viable restringir la aplicación de la institución del amparo de pobreza a la presentación de la demanda, sino que ésta puede elevarse durante el curso del proceso, al respecto razonó de la siguiente manera: En línea con lo dicho en precedencia, se tiene, entonces, que avalar la interpretación restrictiva de la norma, según la cual el demandante solo puede pedir el amparo de pobreza antes de la presentación de la demanda, no concuerda con lo expuesto, ni con la segunda parte del mismo enunciado, conforme con la cual cualquiera de las partes podrá solicitarla durante el curso del proceso, habida cuenta que claro es que el extremo activo también es una de las partes a las que se refiere el artículo; de modo que no tiene fundamento constitucional admisible que los demás sujetos procesales puedan requerir el mencionado reconocimiento en cualquier etapa del trámite,

pero que quien promovió la causa vea limitada dicha prerrogativa si no la ejerció con la radicación del escrito inicial.

La Sala Civil manifestó que, en el sentido de que el trámite de la solicitud de amparo de pobreza se debe resolver de plano, sin perjuicio de que su terminación o revocatoria procede por solicitud de la parte contraria, que deberá acreditar que el beneficiario faltó a la verdad, ahí sí aportando las pruebas correspondientes.

Que la solicitud de amparo debe formularse por la persona que se halla en la situación que describe la norma. Como quiera que la solicitud debe elevarse bajo la gravedad de juramento, como lógica consecuencia se deriva que ésta debe provenir directamente del interesado quien debe exponer al juez las circunstancias bajo las cuales se encuentra y que le impiden asumir las cargas económicas para atender el proceso, en ese mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Civil en la providencia AC3350-2016.

Del mismo modo cabe señalar que mediante providencia del 19 de enero de 2022 con ponencia del Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo estableció la posición en que no se debía interponer cargas para acreditar el amparo solicitado, de modo que se puede determinar que la única carga que fue establecida el legislador fue la de realizar las manifestaciones bajo la gravedad de juramento, cuya disposición se prevé en el inciso 2 del artículo 152 del C.G. del P respectivamente.

Así mismo la Corte Constitucional mediante sentencia T-374 del 2021 expresó que el amparo de pobreza busca hacer efectivo el derecho fundamental a la administración de justicia frente a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

Por los argumentos antes expuestos este apoderado judicial no comparte la decisión del Despacho, además de que se está cumpliendo con los requisitos legales, de forma directa está violentando el Derecho Fundamental que le asiste a mis prohijados al acceso a la justicia.

ANEXO:

1. Información relacionad con mis prohijados.
- 2.

Cordialmente,



ROBINSON JAVIER HERRERA PEÑALOZA
C.C. No. 93.134.761 de Espinal (Tolima)
T.P. No. 258.066 del C. S. de la J.
Celular: 310 4545637

Calle 11 No. 1-92 Edificio Centro de Especialista oficina 204
Celulares. 310 4545637
Ibague - Tolima